



«Fabricado en Europa» con principios de empleos de calidad

Adoptada en la reunión de Comité Ejecutivo de 19 y 20 de mayo de 2026

Europa necesita una estrategia industrial más sólida para proteger y crear empleos de calidad, reforzar su base productiva y garantizar la resiliencia económica, social, territorial y medioambiental a largo plazo. En un contexto de declive industrial, falta de inversión, demanda débil, inestabilidad geopolítica, volatilidad de los precios de la energía y creciente competencia mundial, es necesario un cambio decisivo que pase de la competitividad basada en los costes a una economía sostenible impulsada por la demanda y la inversión. Esto es esencial para reforzar la seguridad económica de Europa, salvaguardando las cadenas de valor críticas y reduciendo la exposición a las perturbaciones externas. Se requiere una acción europea urgente y coordinada.

El concepto «Made in Europe» debería abarcar a la UE y a los países integrados estructuralmente en el mercado único mediante la armonización normativa y la participación en su marco basado en normas, incluidos los países de la AELC, los países candidatos y el Reino Unido. La participación debe basarse en una integración efectiva en el marco normativo, social e industrial de Europa, incluido el respeto de las normas laborales, normas medioambientales y los derechos humanos, y la contribución a una convergencia social y económica al alza, debe fortalecer el mercado único, reforzar la convergencia y apoyar el crecimiento económico en todos los Estados miembros y regiones, contribuyendo a la cohesión económica, social y territorial, y evitando el agravamiento de las desigualdades regionales en toda Europa, así como la cooperación industrial transfronteriza para construir cadenas de valor europeas integradas.

«Fabricado en Europa» debe significar fabricado con empleos de calidad y derechos sindicales. Una carrera a la baja en materia de normas laborales y la falta de igualdad de condiciones socavan la competitividad a largo plazo. Los empleos de calidad favorecen la productividad, la innovación y la resiliencia, mientras que una negociación colectiva sólida y el diálogo social estabilizan la formación de los salarios, reducen la desigualdad y favorecen la inversión. La preferencia europea debe, por lo tanto, ir ligada a condicionalidades sociales, fiscales y medioambientales sólidas. Los sindicatos deben integrarse formalmente en la gobernanza y la aplicación de la normativa, incluyendo el acceso a la información relevante de las empresas.



Toda la financiación pública, incluida la procedente de la contratación pública, las ayudas estatales, las subastas y los instrumentos de financiación europeos y nacionales, debe respetar estos requisitos. La recuperación de fondos, las sanciones elevadas y las exclusiones deben aplicarse como sanciones por incumplimiento.

El refuerzo de la base productiva de Europa debe abarcar los sectores y las cadenas de valor que sustentan la economía productiva europea, las industrias estratégicas y los servicios públicos y privados esenciales. Se requiere un enfoque diferenciado: pueden justificarse niveles más elevados de preferencia europea en sectores prioritarios. Los objetivos de reindustrialización deben entenderse como puntos de partida mínimos y reforzarse progresivamente con el tiempo, dependiendo de la importancia estratégica y las características del sector en cuestión. El objetivo general debe seguir siendo el fortalecimiento de la capacidad de producción de Europa tanto en las industrias emergentes como en la transformación de las existentes y de su mano de obra. La soberanía industrial requiere el control de las infraestructuras y cadenas de suministro clave, incluyendo la energía, los sistemas digitales y el acceso a materias primas críticas. En sectores estratégicos se requiere una mayor coordinación para evitar duplicidades, garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y dar prioridad al abastecimiento europeo y a la investigación y desarrollo conjuntos. La descarbonización y la digitalización deben modernizar la base industrial, no acelerar la desindustrialización.

La inversión privada también debe apoyar el «Made in Europe». Limitar el enfoque únicamente a la contratación pública sería insuficiente para estar a la altura de la magnitud del desafío. La preferencia europea debe influir en las cadenas de valor, incluidas las actividades del sector privado y las decisiones de abastecimiento de las grandes empresas, en particular en los sectores estratégicos. El principal reto de Europa es la falta de inversión, no los costes laborales. Las empresas que se benefician del acceso al mercado europeo deben contribuir a reforzar la capacidad productiva de Europa mediante la inversión en innovación, descarbonización y desarrollo de la mano de obra, entre otras cosas evitando la deslocalización de actividades estratégicas y basadas en el conocimiento. Unas cadenas de valor más cortas y de carácter más regional también pueden reforzar la resiliencia al reducir las vulnerabilidades.

La capacidad macroeconómica, un mayor crecimiento salarial y una negociación colectiva reforzada, el aumento de la inversión privada y la participación en los beneficios son esenciales para lograr un «Made in Europe» creíble. Las estrategias industriales exitosas combinan la contratación pública con la inversión pública, las herramientas financieras y la planificación a largo plazo, y requieren un papel más destacado del sector público a la hora de configurar la inversión y orientar el capital hacia la transformación industrial, sustituyendo un modelo en el que los riesgos se socializan mientras que los beneficios se privatizan. Esto requiere establecer una capacidad de inversión europea permanente, emitir deuda conjunta y reformar las normas fiscales para respaldar la inversión y la demanda públicas sostenidas, junto con instrumentos de financiación comunes de la UE que operen a gran escala. Cuando la inversión pública genere beneficios empresariales significativos, deben



existir mecanismos que garanticen un retorno justo para el sector público, incluyendo la participación en los beneficios, requisitos de reinversión y condiciones exigibles, asegurando que los beneficios se canalicen de nuevo hacia la inversión productiva en lugar de hacia la extracción financiera a corto plazo. El apoyo público debe estar condicionado a que las empresas contribuyan a objetivos públicos claramente definidos y aporten un valor cuantificable. Cuando la compra de productos europeos suponga mayores costes, un mayor apoyo fiscal debe evitar la austeridad.

El «Made in Europe» debe combinar la fortaleza industrial con una autonomía estratégica abierta en el comercio mundial. En un contexto en el que los principales socios comerciales aplican subvenciones y requisitos de contenido nacional, Europa no puede seguir limitada por un enfoque de mercado puramente neutral. Un enfoque «Made in Europe» sería compatible con las normas del comercio internacional cuando se justifique por razones de interés público¹. Al mismo tiempo, debe equilibrar el fortalecimiento del mercado interior con una autonomía estratégica abierta. Algunos sectores estratégicos seguirán orientados a la exportación. Esto requiere reconocer que Europa no puede ser totalmente autosuficiente. Un enfoque «Made in Europe» debería, por tanto, garantizar la igualdad de condiciones, al tiempo que contribuye a unos sindicatos más fuertes y a unas normas laborales y medioambientales más estrictas a nivel mundial, en lugar de promover el dumping social. Europa debe garantizar que los productos comercializados procedentes de terceros países respeten normas laborales y medioambientales equivalentes. En los raros casos en que esto no sea posible, deben aplicarse impuestos más elevados. En casos específicos y justificados, pueden ser necesarios enfoques comerciales diferenciados para salvaguardar los sectores estratégicos y apoyar su viabilidad a largo plazo.

El «Made in Europe» implicará compensaciones económicas y sociales que deben gestionarse de forma activa. Estas compensaciones deben guiarse por rigurosas evaluaciones de impacto que den prioridad a la equidad, los empleos de calidad y la resiliencia a largo plazo. Cuando se produzcan reestructuraciones, deben reforzarse y aplicarse los derechos sindicales a la información, la consulta, la participación de las personas trabajadoras y sus representantes y la negociación con los sindicatos, junto con un mayor apoyo financiero – entre otros mediante el programa SURE 2.0 y fondos específicos - para que los y las trabajadoras y sus comunidades no soporten por sí solos los costes del cambio industrial y la diversificación comercial.

La descarbonización y la reindustrialización deben ir de la mano. Los mercados líderes de tecnologías limpias y los sectores con bajas emisiones de carbono, como el transporte, deben afianzar la producción en Europa, mientras que la

¹ En virtud de las excepciones generales del artículo XX del GATT, las medidas pueden justificarse cuando sean necesarias para proteger la moral pública o la vida o la salud de las personas, los animales o las plantas, siempre que no se apliquen de manera que constituyan una discriminación arbitraria o injustificable o una restricción encubierta del comercio. La UE debería hacer pleno uso de estas disposiciones, tal y como ya hacen muchos de nuestros socios comerciales.



descarbonización de las industrias intensivas en energía y fundamentales debe ser prioritaria junto con el apoyo a las nuevas tecnologías. Los elevados costes energéticos derivados de los combustibles fósiles afectan a la seguridad de la inversión y a la productividad. La relocalización de la producción no debe significar la relocalización de la contaminación, y la diversificación del comercio no debe socavar la sostenibilidad ni externalizar la contaminación.

La CES insta a aplicar un enfoque «Fabricado en Europa con empleos de calidad» que incorpore la condicionalidad social, refuerce la capacidad industrial, impulse la inversión sostenible y garantice que la reindustrialización beneficie a la clase trabajadora, las regiones y las comunidades. Este enfoque debe seguir siendo adaptable a lo largo del tiempo para garantizar su eficacia en un contexto mundial en rápida evolución.